






Los trabajadores latinos necesitan alivio ante los altos costos de la energía

ELAN SYKES
PROGRESSIVE POLICY INSTITUTE

FEBRERO DE 2026

 @ppi |  @progressivepolicyinstitute |  /progressive-policy-institute

Los trabajadores latinos necesitan alivio ante los altos costos de la energía

ELAN SYKES

FEBRERO DE 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Las elecciones fuera de año de noviembre de 2025 confirmaron que el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos. Los altos costos de la energía, por ejemplo, fueron un tema central en las contiendas de Virginia, Nueva Jersey y Nueva York. Este problema afecta a todos los estadounidenses, por supuesto, pero impone cargas financieras especialmente pesadas a las comunidades de bajos ingresos y de clase trabajadora. Muchas familias latinas urbanas, por ejemplo, pagan costos de energía más altos que los vecindarios circundantes más acomodados. Este informe, el segundo de una serie de estudios del PPI sobre la inseguridad energética en Estados Unidos, examina las razones de esta disparidad.

Concluye que los latinos tienen el doble de probabilidades que sus contrapartes blancas de experimentar inseguridad energética. Esto implica dificultades para acceder a la energía o pagarla, las decisiones difíciles que enfrentan entre pagar las facturas de servicios públicos y cubrir otras necesidades urgentes, y, en consecuencia, un mayor riesgo de cortes del servicio. Como el PPI ha documentado anteriormente, los vecindarios afroamericanos de clase trabajadora también enfrentan cargas energéticas más altas que los suburbios cercanos. Creemos que estas disparidades merecen mayor atención por parte de los responsables de las políticas energéticas en Estados Unidos.

Basándose en nuestro estudio sobre las altas cargas energéticas en vecindarios afroamericanos de Boston, este informe explora el mismo fenómeno en comunidades latinas de clase trabajadora en Massachusetts, incluida Boston, así como en la ciudad de Los Ángeles. Identificamos la falta de infraestructura moderna de redes eléctricas y gasoductos para abastecer a todos los vecindarios con energía asequible y abundante como la principal causa de la mayor inseguridad energética de los latinos trabajadores en Massachusetts y California.

Estos hallazgos plantean un desafío para los activistas de la llamada “justicia ambiental”. Si bien han enfatizado correctamente los riesgos ambientales y de salud de la contaminación en

comunidades de bajos ingresos y minorías, no han puesto suficiente atención en los costos económicos y las oportunidades —crecimiento del empleo, innovación, inversión y precios más bajos— de una transición equilibrada hacia la energía limpia. Lo que los residentes de comunidades de bajos ingresos desean por encima de todo no son reparaciones por injusticias pasadas, sino un acceso igualitario a energía asequible y confiable.

Los latinos constituían el 19.5 % de la población y el 10 % del electorado en 2024.¹ Varían ampliamente en origen nacional, nivel socioeconómico y distribución geográfica. Una combinación de ingresos promedio bajos pero en aumento, niveles educativos más bajos, discriminación histórica en los mercados laborales y de vivienda, y la falta de infraestructura eléctrica y energética adecuada significa que muchas familias latinas de clase trabajadora tienen menores ingresos, viviendas y electrodomésticos menos eficientes, y facturas de energía más altas que los estadounidenses con educación universitaria que viven en suburbios acomodados. Las barreras del idioma, los recursos financieros limitados y el acceso deficiente a la infraestructura hacen que políticas climáticas como la Ley de Reducción de la Inflación hayan brindado mucho menos apoyo a las comunidades minoritarias con alta carga energética.

En las encuestas del PPI a trabajadores estadounidenses, los votantes latinos apoyan en general la acción contra el cambio climático y una transición hacia fuentes de energía limpia, pero toman sus decisiones energéticas basándose en el costo. Para ellos, las altas facturas de combustible son un elemento central de la crisis más amplia del costo de vida que enfrentan los trabajadores estadounidenses. Para aliviar esta preocupación, los responsables de las políticas públicas en Estados Unidos deberían adoptar políticas

climáticas y energéticas más inteligentes que no amenacen a estas comunidades con prohibiciones inmediatas de los combustibles fósiles que generen escasez de energía y precios más altos.

Nuestro informe concluye con las siguientes recomendaciones de política pública para construir un nuevo pacto con los trabajadores estadounidenses en materia de clima y energía, y garantizar que las comunidades latinas no se queden aún más rezagadas:

- **Un enfoque equilibrado y tecnológicamente neutral** En lugar de prohibiciones impopulares y prematuras a los combustibles fósiles, los responsables de las políticas públicas deberían apoyar una matriz energética que incluya energía nuclear, energías renovables, baterías, captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) y gas natural con bajas emisiones de metano, para garantizar tanto la reducción de emisiones como el acceso a energía asequible.
- **Reforma de permisos para acelerar el despliegue de energía limpia:** El Congreso y los gobiernos estatales deberían simplificar los procesos de aprobación de proyectos de energía renovable, la expansión de la red eléctrica y la infraestructura de gasoductos, con el fin de reducir costos y mejorar la confiabilidad del sistema energético.
- **Asistencia energética focalizada para familias de bajos ingresos:** El Congreso debería ampliar y modernizar programas como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y el Programa de Asistencia para la Climatización de Viviendas (WAP), para atender mejor a los hogares que enfrentan altas cargas por costos de energía.

- **Centros comunitarios de energía:** Establecer centros gestionados por gobiernos locales donde los ciudadanos puedan obtener información sobre eficiencia energética, opciones de energía limpia y programas de asistencia financiera, inspirados en los centros de resiliencia de Colorado y en los Centros de Empleo Estadounidenses del gobierno federal.
- **Vivienda asequible y mejora de la calidad de vida:** Muchos hogares latinos en comunidades urbanas, suburbanas y rurales de todo el país tienen dificultades para encontrar vivienda asequible y se ven obligados a vivir en viviendas más antiguas y de menor calidad, ubicadas en vecindarios contaminados con servicios eléctricos y acceso a agua limpia inadecuados.
- **Proveer amenidades comunitarias** como árboles, sombra solar, redes de distribución eléctrica reforzadas y espacios para diversos medios de transporte mejoraría la calidad de vida de las familias hispanas que actualmente están expuestas a cargas desproporcionadas de contaminación y a fenómenos climáticos extremos, mientras viven en viviendas inaccesibles o hacinadas.
 - **Mejores empleos, bajo techo y al aire libre:** Muchos latinos sin educación universitaria trabajan en empleos al aire libre y en ocupaciones relacionadas con tecnologías energéticas, como la construcción, la agricultura y la logística de reparto. Dado que el oeste de Estados Unidos ya está sintiendo los impactos del cambio climático, otorgar a los bomberos los permisos y recursos necesarios para **implementar medidas proactivas de prevención** de incendios reduciría los impactos en la salud y el clima tanto de los trabajadores al aire libre como de las ciudades

cercanas. Asimismo, ofrecer orientación e incentivos tecnológicos para **proteger a los trabajadores de la exposición al calor extremo** y de otros desafíos de adaptación climática ayudaría a abordar problemas directamente relacionados con la vida cotidiana de los trabajadores.

COMUNIDADES LATINAS Y LA CARGA DE LOS COSTOS DE LA ENERGÍA

Generalizar sobre los ciudadanos latinos es difícil, ya que pertenecen a una categoría extraordinariamente diversa. Existen grandes diferencias según el país de origen, la religión, la raza y el momento y la vía de inmigración. A nivel regional y nacional, las familias latinas ya no se limitan a las supuestas “zonas históricas” de las comunidades fronterizas tradicionales del suroeste ni a los vecindarios de acogida de inmigrantes en las principales ciudades de la Costa Este y del Cinturón Industrial. Hoy en día, viven en todo el país.

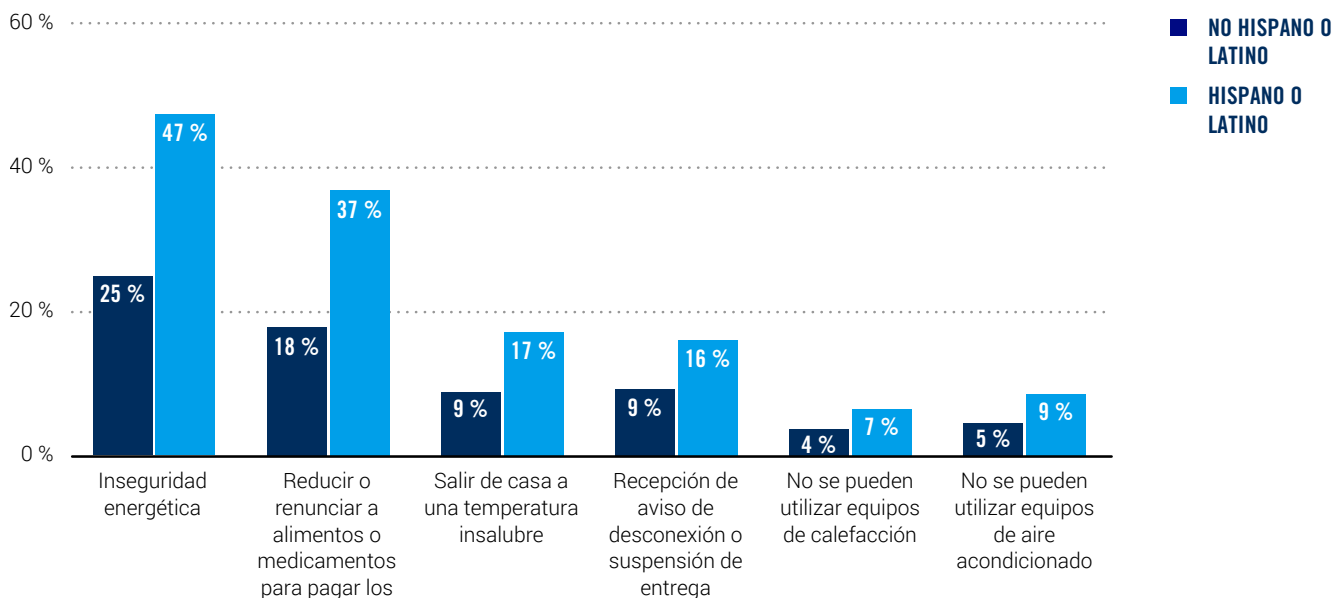
Los costos de la energía y la calidad ambiental local también varían ampliamente entre distintos vecindarios, ciudades, estados y regiones del país. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, los datos empíricos de la Encuesta de Consumo Energético Residencial (RECS, por sus siglas en inglés) de la Administración de Información Energética y de la herramienta de Datos de Asequibilidad Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LEAD) del Departamento de Energía confirman que las familias de comunidades latinas de clase trabajadora suelen destinar una proporción mayor de sus ingresos a los costos de energía residencial que los hogares que viven en vecindarios mejor integrados o mayoritariamente blancos.

La inseguridad energética, medida por la RECS, refleja la proporción de distintos grupos de la población que deben optar por prescindir de

alimentos, medicamentos, mantener su vivienda a una temperatura segura o incluso enfrentar la suspensión de los servicios públicos. En la encuesta más reciente de la RECS, solo una cuarta

parte de las familias no latinas reportó algún nivel de inseguridad energética, en comparación con la mitad de todos los hogares latinos.²

FIGURA 1: INSEGURIDAD ENERGÉTICA EN LOS HOGARES LATINOS

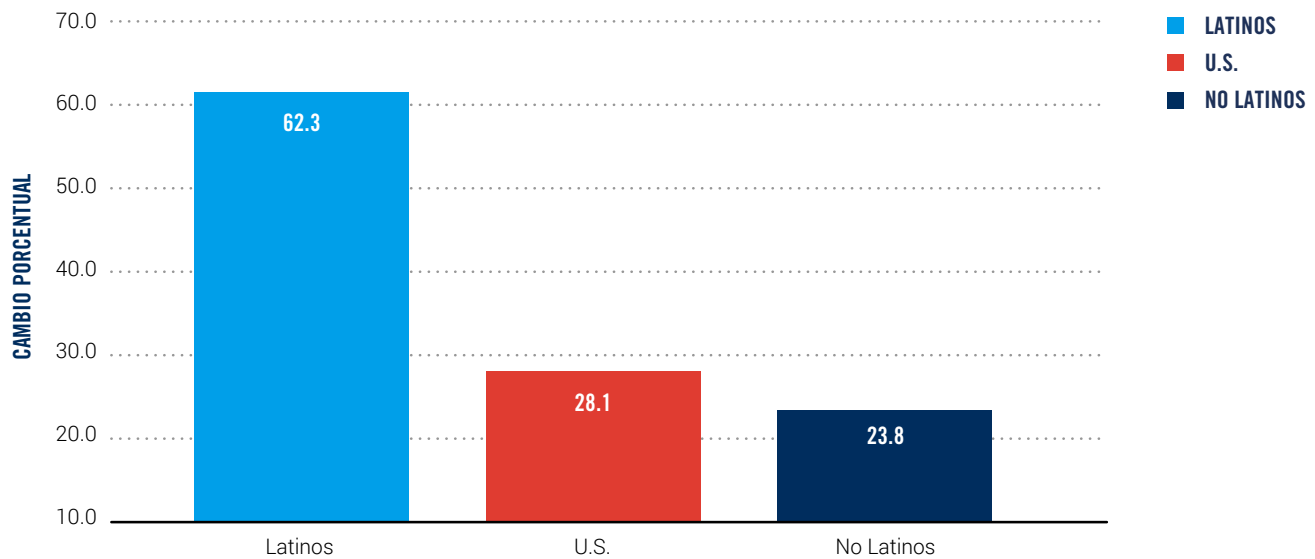


Fuente: EIA RECS 2020, Inseguridad energética en los hogares (HC11.1)³

Como documenta la académica en salud pública Diana Hernandez, las causas y los efectos de la inseguridad energética varían según el caso, pero en términos generales pueden resumirse como una combinación de déficits de infraestructura a nivel vecinal, prácticas individuales y decisiones sobre tecnologías energéticas, y condiciones propias de las edificaciones —como la antigüedad y la calidad de los materiales de aislamiento—, que en conjunto generan diversos daños económicos y a la salud, como los registrados en la RECS.⁴

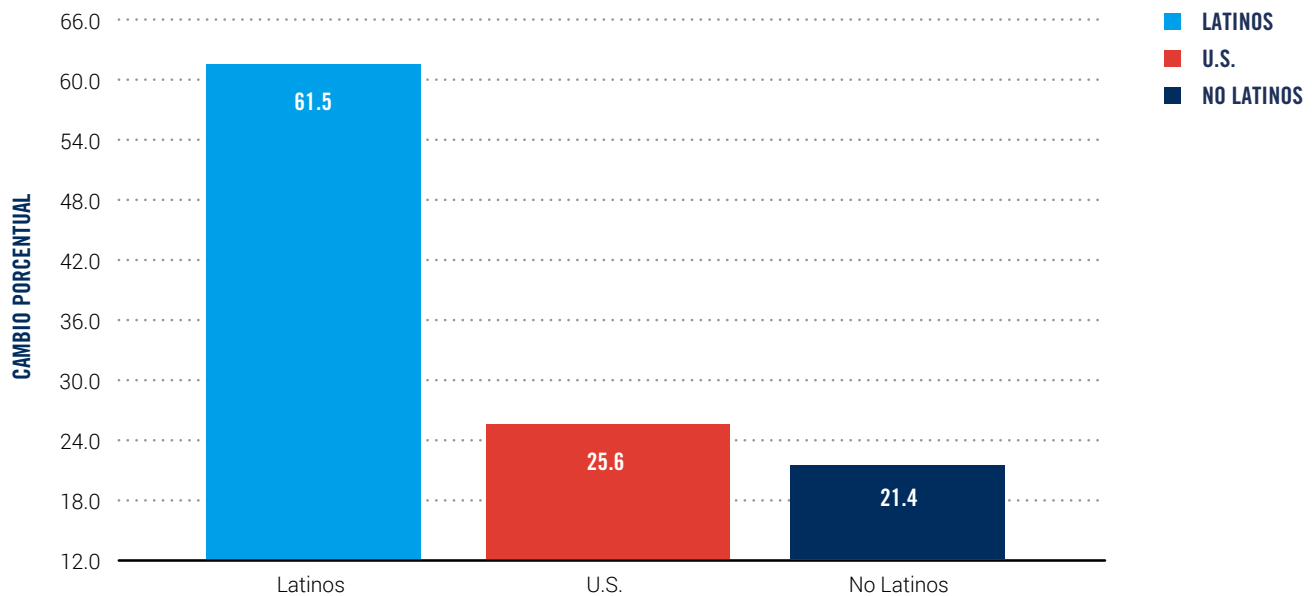
Aun en medio de estas disparidades, el informe anual sobre el PIB latino elaborado por David Hayes-Bautista y otros autores concluye que la llamada “economía latina” es un segmento dinámico y de rápido crecimiento dentro de la economía general de Estados Unidos. Como señalan los autores, los salarios reales y el consumo real de los latinos en Estados Unidos están creciendo mucho más rápido que la economía estadounidense en su conjunto:

FIGURA 2: CRECIMIENTO DEL CONSUMO REAL TOTAL (2010–2023)



Source: Latino GDP Report⁵

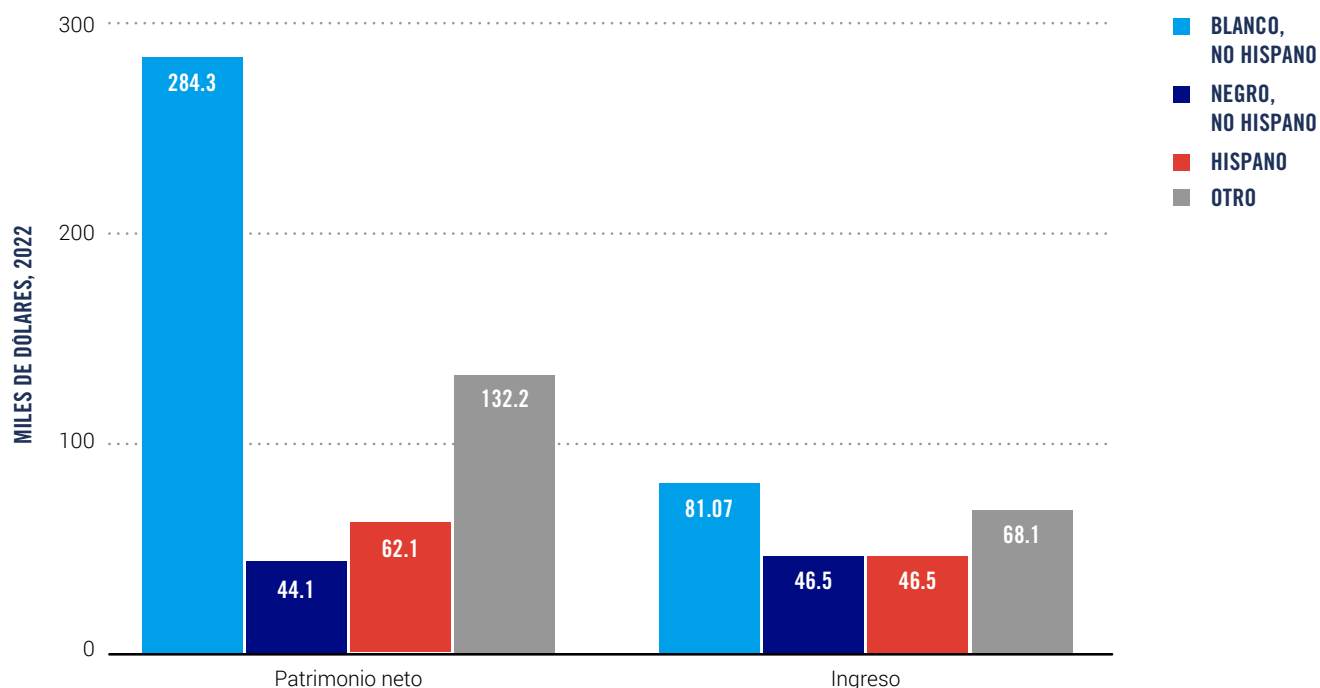
FIGURA 3: CRECIMIENTO REAL DE INGRESOS POR SALARIOS Y SUELDOS (2010–2023)



Source: Latino GDP Report⁶

A pesar de estos importantes avances en ingresos y educación, los hogares latinos aún perciben ingresos aproximadamente equivalentes a la mitad

de los de la familia promedio no latina y poseen cerca de una sexta parte de los activos de una familia blanca no latina:

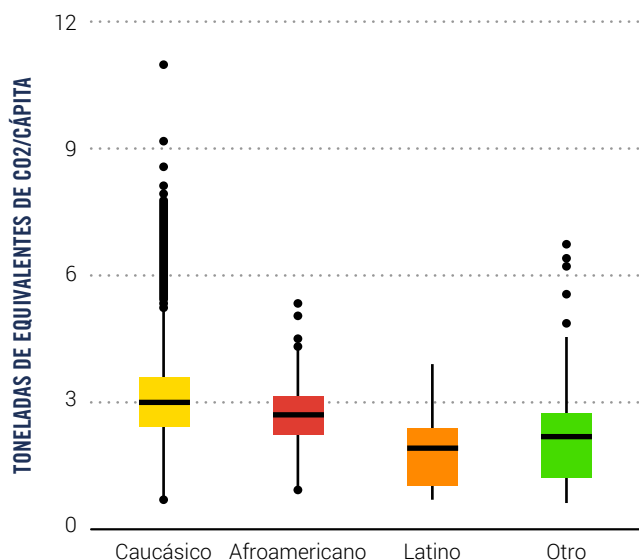
FIGURA 4: DESIGUALDADES EN RIQUEZA E INGRESOS

Fuente: Encuesta de Finanzas del Consumidor, Reserva Federal

Ya sea que vivan en un departamento urbano hacinado en Nueva York, en un desarrollo suburbano promedio o en una vivienda dentro de una colonia en Texas (comunidades rurales no incorporadas donde viven trabajadores agrícolas), las familias latinas de clase trabajadora tienen mayor probabilidad de habitar viviendas antiguas, con menor aislamiento para protegerlas del clima y de la exposición a contaminantes, equipadas con electrodomésticos más viejos y menos eficientes, y atendidas por una infraestructura insuficiente para satisfacer las necesidades locales.

Además de que los costos de la energía representan una proporción mayor del presupuesto de los hogares de bajos ingresos, las viviendas con baja eficiencia energética obligan a las familias a consumir más energía para alcanzar el mismo nivel de servicios que tendrían si vivieran en una vivienda nueva con infraestructura moderna.⁷ Debido a los precios más altos, los latinos consumen menos energía y emiten menos gases de efecto invernadero que el promedio de los hogares en Estados Unidos, al mismo tiempo que enfrentan la carga de un aire, agua y suelo insalubres en sus vecindarios, como resultado de fuentes históricas de contaminación.⁸

FIGURA 5: EMISIONES PER CÁPITA



Source: Energy Research & Social Science and Environmental Science & Technology

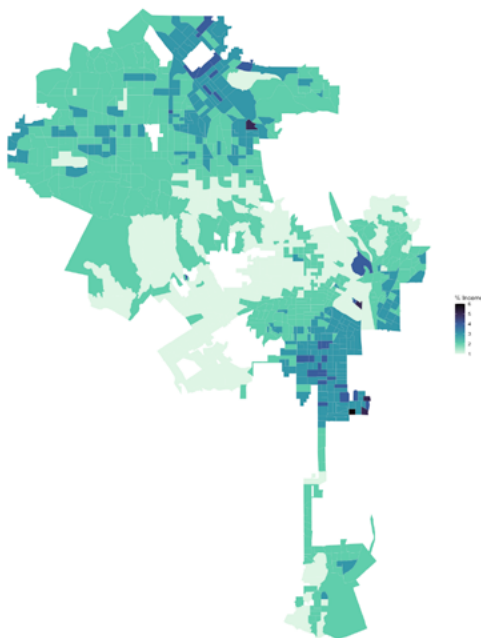
El cambio climático podría ampliar la frecuencia y la intensidad de las olas de calor, las sequías y otros fenómenos climáticos extremos, lo que representa un problema particular para los latinos de clase trabajadora. Las viviendas menos eficientes y con menor aislamiento exponen a sus residentes a mayores riesgos económicos y para la salud, y los latinos viven en este tipo de hogares en una proporción mayor que el promedio nacional, a menudo en vecindarios con menor resiliencia frente a desastres.⁹ Asimismo, los latinos tienen mayor probabilidad de enfrentar riesgos de salud relacionados con el calor, ya que están sobrerrepresentados en trabajos al aire libre como la agricultura y la construcción. Dadas estas vulnerabilidades, los latinos de clase trabajadora que laboran en los sectores de la energía, la construcción, la manufactura o los oficios especializados tienen el potencial de obtener beneficios económicos significativos a partir de una política bien diseñada que impulse, de manera gradual, la transición de la economía de Estados Unidos hacia la energía limpia.

ESTUDIOS DE CASO

Los siguientes estudios de caso utilizan datos previamente almacenados de la base de datos sobre carga de costos energéticos de la herramienta LEAD (Low-income Energy Affordability Database), recopilados antes de que la administración Trump eliminara los datos étnicos y raciales del conjunto de datos. Estos análisis emplean la métrica de LEAD sobre la carga de costos de la energía residencial como proporción del ingreso, comparada entre distritos censales y su composición étnica. Debajo de los mapas se presenta una correlación lineal entre la carga energética y la proporción de población latina a nivel de distrito censal. No obstante, estos cálculos se basan en la proporción poblacional de cada distrito dentro de cada ciudad, y no en hogares individuales. Los mapas de todos los distritos representados por el CHC con correlaciones lineales simples se pueden consultar en el Apéndice I, y los mapas de todos los demás distritos congresionales, organizados por estado, están disponibles en el sitio web del PPI.

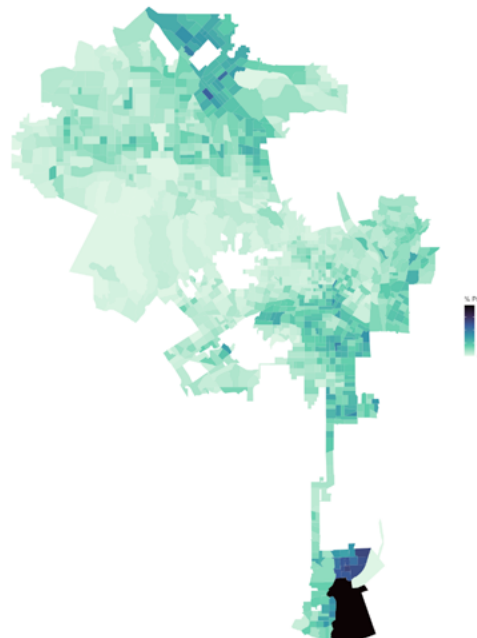
ESTUDIO DE CASO 1: LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

CARGA DE COSTOS DE LA ENERGÍA (% DEL INGRESO)



Fuente: Censo de Estados Unidos (vía tigris) y herramienta LEAD del Departamento de Energía (DOE)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN HISPANA (%)

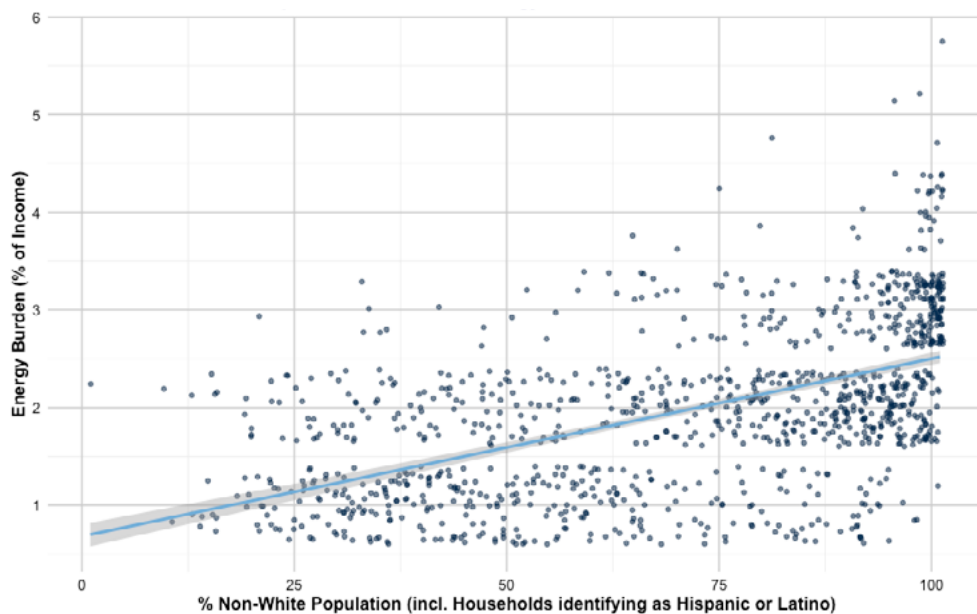


Fuente: Censo de Estados Unidos (vía tigris) y herramienta LEAD del Departamento de Energía (DOE)

Este estudio de caso presenta una visión general de la carga de los costos de la energía como proporción del ingreso en todos los distritos censales de la Ciudad de Los Ángeles (y no en la totalidad de las comunidades circundantes del condado de Los Ángeles). California ha enfrentado durante mucho tiempo dificultades para desarrollar nuevos proyectos de vivienda e invertir en infraestructura eléctrica debido a sus estrictas y prolongadas leyes de revisión ambiental y otorgamiento de permisos, en particular la CEQA (California Environmental Quality Act). En muchos aspectos, la CEQA resulta más onerosa que su equivalente a nivel nacional, la NEPA, debido a su amplia aplicabilidad y a la creación de numerosos puntos de veto para los opositores a los proyectos, incluso en casos donde la NEPA no aplica.

El efecto de este conjunto de regulaciones ha sido congelar los sistemas existentes de generación eléctrica, que no logran abastecer a los vecindarios de bajos ingresos con alta proporción de población latina y otras minorías con energía abundante y asequible.

PARTICIPACIÓN DE HOGARES DE COLOR Y CARGA DE COSTOS ENERGÉTICOS EN DISTRITOS CENSALES DE LOS ÁNGELES



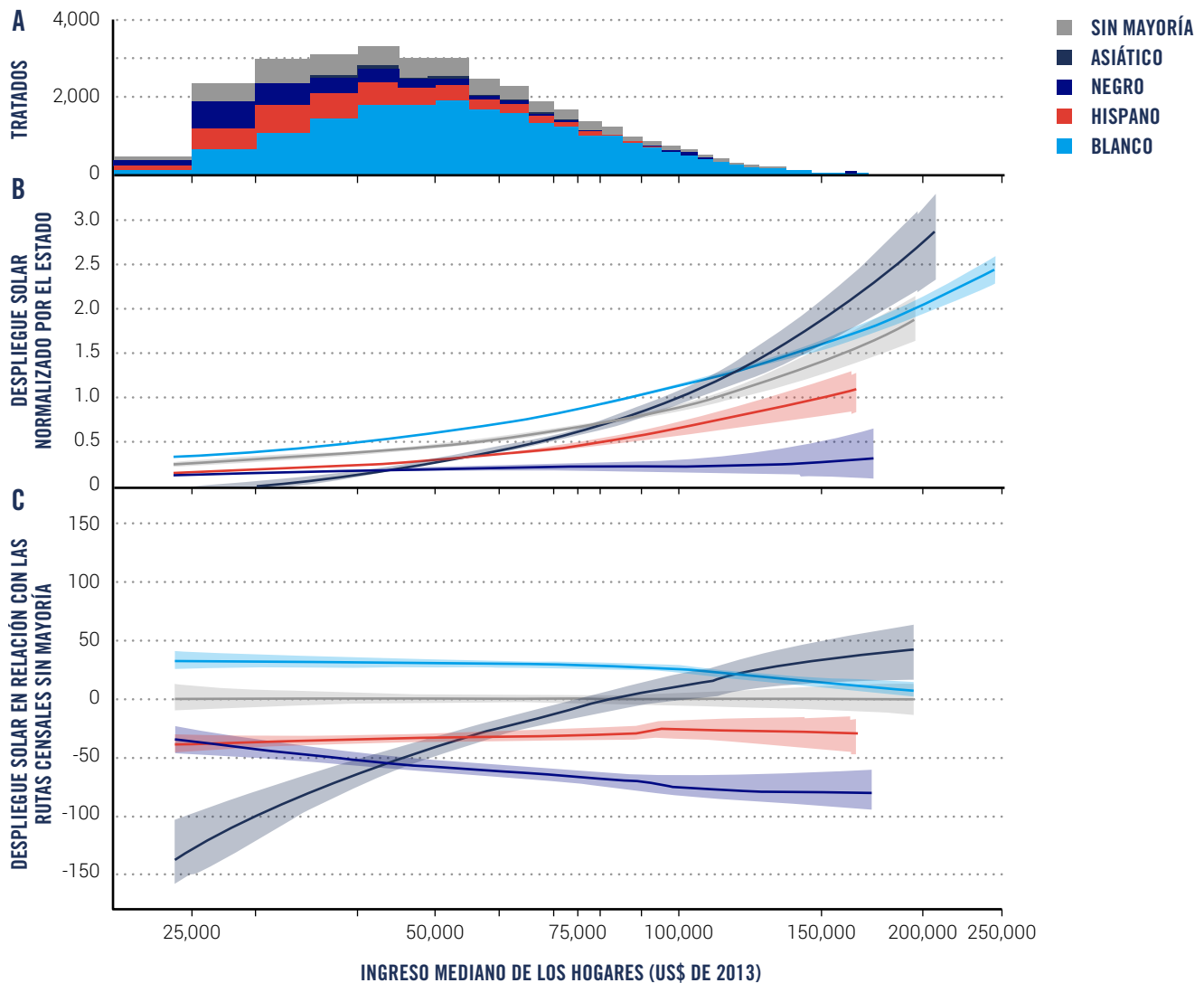
Fuente: Datos LEAD del Departamento de Energía

Los Ángeles tiene planes ambiciosos para alcanzar una matriz energética 100 % renovable, al tiempo que impulsa la adopción de vehículos eléctricos y el uso de almacenamiento de energía a escala de red para gestionar los picos de demanda. Sin embargo, el acceso a cargadores para vehículos eléctricos está limitado por la insuficiencia de las redes locales de distribución existentes, las cuales no pueden expandirse con la rapidez necesaria debido a los largos procesos de aprobación en California. El resultado ha sido una marcada desigualdad en el acceso a cargadores para vehículos eléctricos y a sistemas solares en azoteas. En un estudio de 2019 titulado “Distributed Solar and Environmental Justice: Exploring the Demographic and Socio-Economic Trends of Residential PV Adoption in California” Lukanov y Krieger encontraron que “los distritos censales que se ubican en el 5 % superior del

índice CalEnviroScreen (es decir, los distritos más desfavorecidos) presentan tasas de adopción 8.2 veces menores que las del 5 % inferior de las puntuaciones CES (las comunidades menos desfavorecidas).¹⁰ THasta la fecha, solo el 2.6 % de la capacidad solar residencial total se ha instalado en el 10 % de las comunidades CES más desfavorecidas. En contraste, el 10 % más acomodado concentra casi el 20 % de toda la energía solar residencial instalada hasta ahora.

En un estudio a nivel nacional realizado por Sunter y otros autores, el acceso a energía solar en azoteas en vecindarios con mayoría de población afroamericana y latina fue significativamente menor (30 % menos) en comparación con distritos sin mayoría racial definida, y considerablemente inferior al de vecindarios con mayoría blanca, los cuales registraron tasas de adopción de energía solar en azoteas 21 % más altas que los distritos sin mayoría.¹¹

FIGURA 6: DESIGUALDADES EN EL ACCESO A ENERGÍA SOLAR EN AZOTÉAS



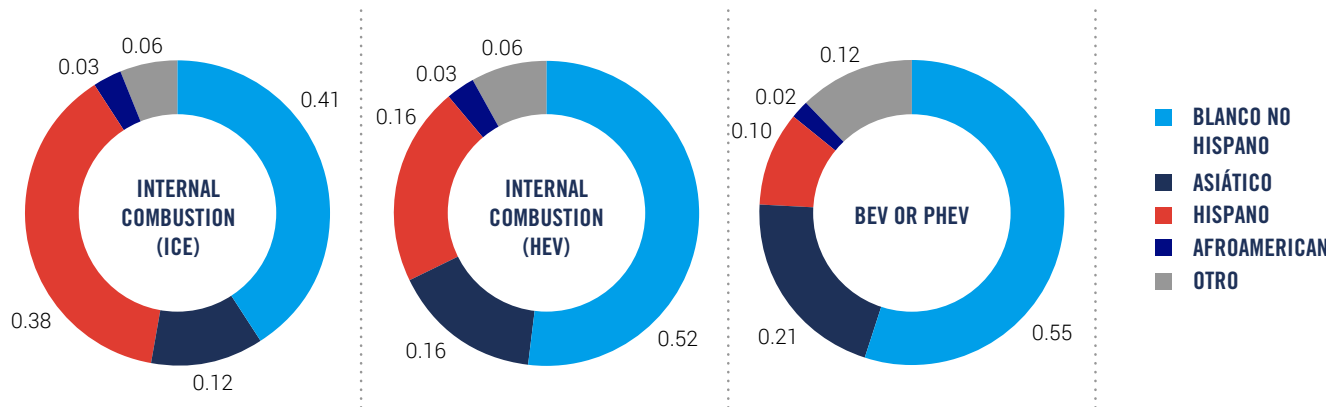
El mismo patrón se observa en el acceso a la infraestructura de carga para vehículos eléctricos (VE). Múltiples estudios han identificado una brecha entre los vecindarios con mayoría afroamericana y latina, que carecen de acceso suficiente a cargadores públicos, y los grupos de bloques censales (CBG, por sus siglas en inglés) con mayoría blanca, los cuales tienen una probabilidad 1.5 veces mayor de contar con cargadores de acceso público¹² La disparidad es

aún mayor cuando se analizan específicamente los cargadores financiados con recursos públicos, que aparecen en CBG con mayoría blanca a una tasa 2.2 veces superior a la de vecindarios comparables con mayoría latina y afroamericana¹³ Estas brechas probablemente contribuyen a menores tasas de adopción de vehículos eléctricos a batería en estas comunidades minoritarias. Un estudio de 2018 realizado por Muehlegger y Rapson encontró que “los hispanos y los blancos no hispanos

representan proporciones aproximadamente iguales de los compradores de vehículos con motor de combustión interna (ICE) en nuestros datos, con 38 % y 41 %, respectivamente. Sin

embargo, los blancos no hispanos realizan el 55 % de las compras de vehículos de combustibles alternativos, en comparación con solo el 10 % de las compras realizadas por hispanos.”¹⁴

FIGURA 7: PROPORCIÓN DE VENTAS POR ETNICIDAD



Fuente: Vehicle Drive Technology

Ante la falta de datos más recientes, no es posible determinar si la creciente disponibilidad de modelos de vehículos eléctricos más económicos y los programas de subsidios implementados posteriormente han contribuido a aumentar las tasas de adopción. No obstante, la combinación de redes eléctricas locales frágiles, una menor adopción de vehículos eléctricos, una crisis habitacional severa y prolongada en California, y temporadas de incendios forestales cada vez más intensas durante el verano colocan a la población latina de California en una posición especialmente difícil frente a la estrategia de transición energética del estado.

Un símbolo de cómo los procesos de otorgamiento de permisos y la infraestructura energética inadecuada afectan a los vecindarios de bajos ingresos en Los Ángeles fue “La Sombrita”. “La

Sombrita” era una pequeña instalación de sombra para paradas de autobús que no contaban con refugios completos, diseñada para ofrecer algo de alivio frente al sol en lugares donde un paradero tradicional no podía cumplir con los requisitos locales de permisos.

La “sombrita” era una estructura tan reducida que ofrecía, de manera casi irónica, muy poca sombra real para sus supuestos “usuarios”. Si la sombrita es toda la infraestructura de adaptación que puede construirse para ayudar a los usuarios del transporte público sin activar las normas municipales y estatales de permisos, el futuro del uso del autobús en el área metropolitana de Los Ángeles se deteriorará a medida que las temperaturas sigan aumentando.

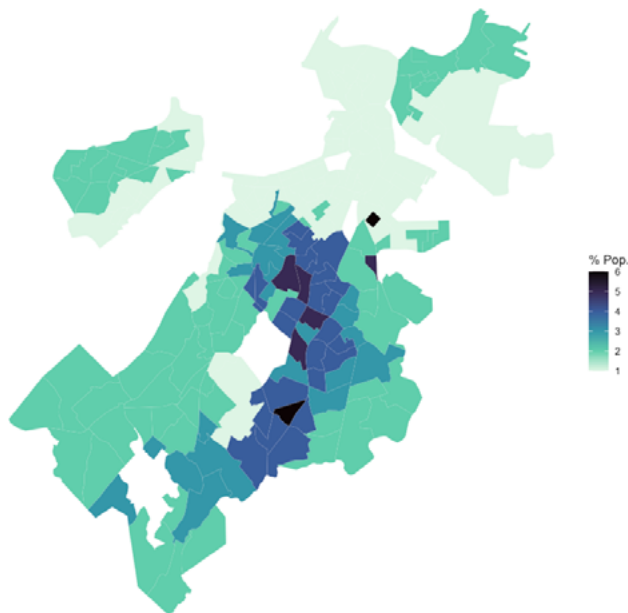
En lugar de una expansión del transporte masivo mediante tecnologías como el Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés), los usuarios angelinos solo pueden esperar una mínima cantidad de sombra mientras permanecen de pie bajo el calor, aguardando autobuses lentos y poco frecuentes.



David James Henry, "La Sombrita Passengers"¹⁵

ESTUDIO DE CASO 2: BOSTON

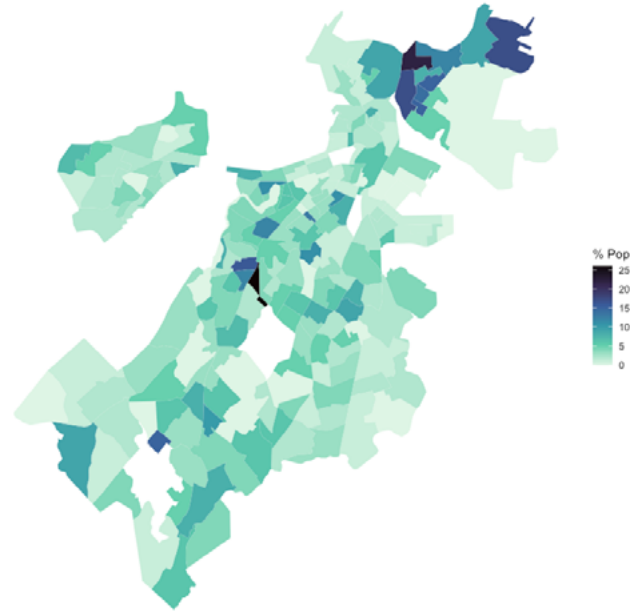
CARGA DE COSTOS DE LA ENERGÍA (% DEL INGRESO)



Fuente: Censo de Estados Unidos (vía tigris) y herramienta LEAD del Departamento de Energía (DOE)

En el informe del PPI de febrero de 2025, "Energy Costs Come First" (Los costos de la energía son lo primero), Boston se utilizó como el único estudio de caso debido al aislamiento de su infraestructura

PORCENTAJE DE POBLACIÓN HISPANA (%)



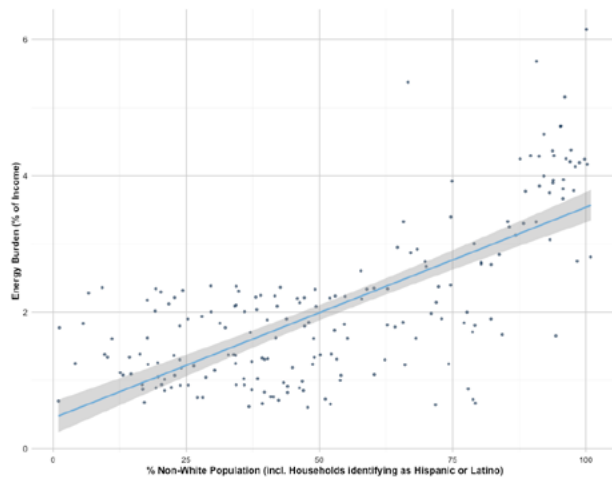
Fuente: Censo de Estados Unidos (vía tigris) y herramienta LEAD del Departamento de Energía (DOE)

energética en relación con el resto de los Estados Unidos continentales y a su consiguiente dependencia de importaciones de gas natural licuado (GNL), principalmente desde Trinidad y

Tobago. Boston no es conocida principalmente por albergar grandes comunidades latinas; sin embargo, el vecindario nororiental de Chelsea sirve como un punto de referencia útil tanto para este informe como para el resto del estado de Massachusetts. Como era de esperarse, los datos

de LEAD reflejan que los vecindarios habitados por hogares blancos no hispanos enfrentan cargas energéticas mucho menores que los vecindarios de comunidades de color:

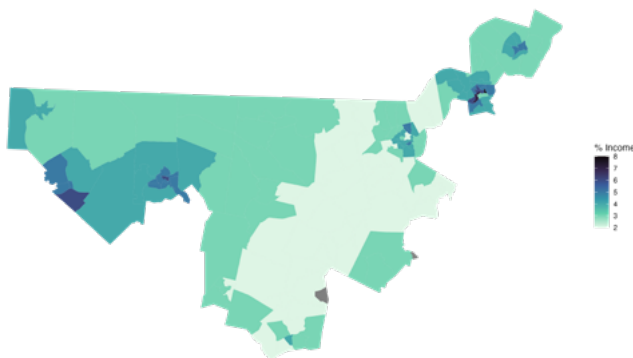
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN NO BLANCA Y NO HISPANA Y CARGA DE COSTOS ENERGÉTICOS EN LOS DISTRITOS CENSALES DE BOSTON



Fuente: Datos LEAD del Departamento de Energía

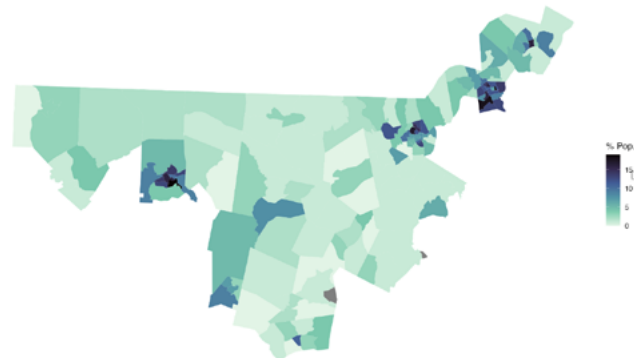
Dado que la base de datos LEAD solo incluye la etnicidad hispana para la población blanca hispana, excluyendo a los afro-latinos y a los inmigrantes indígenas de habla española, este diagrama de dispersión muestra a la población total no blanca. En todo el estado, el mapa de carga de costos energéticos del Distrito 3 de la representante Trahan, miembro del CHC, muestra el mismo patrón:

CARGA DE COSTOS DE LA ENERGÍA EN EL DISTRITO 03 DE MASSACHUSETTS



Fuente: Censo de Estados Unidos (vía tigris) y herramienta LEAD del Departamento de Energía (DOE)

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN BLANCA HISPANA O LATINA EN EL DISTRITO 03 DE MASSACHUSETTS

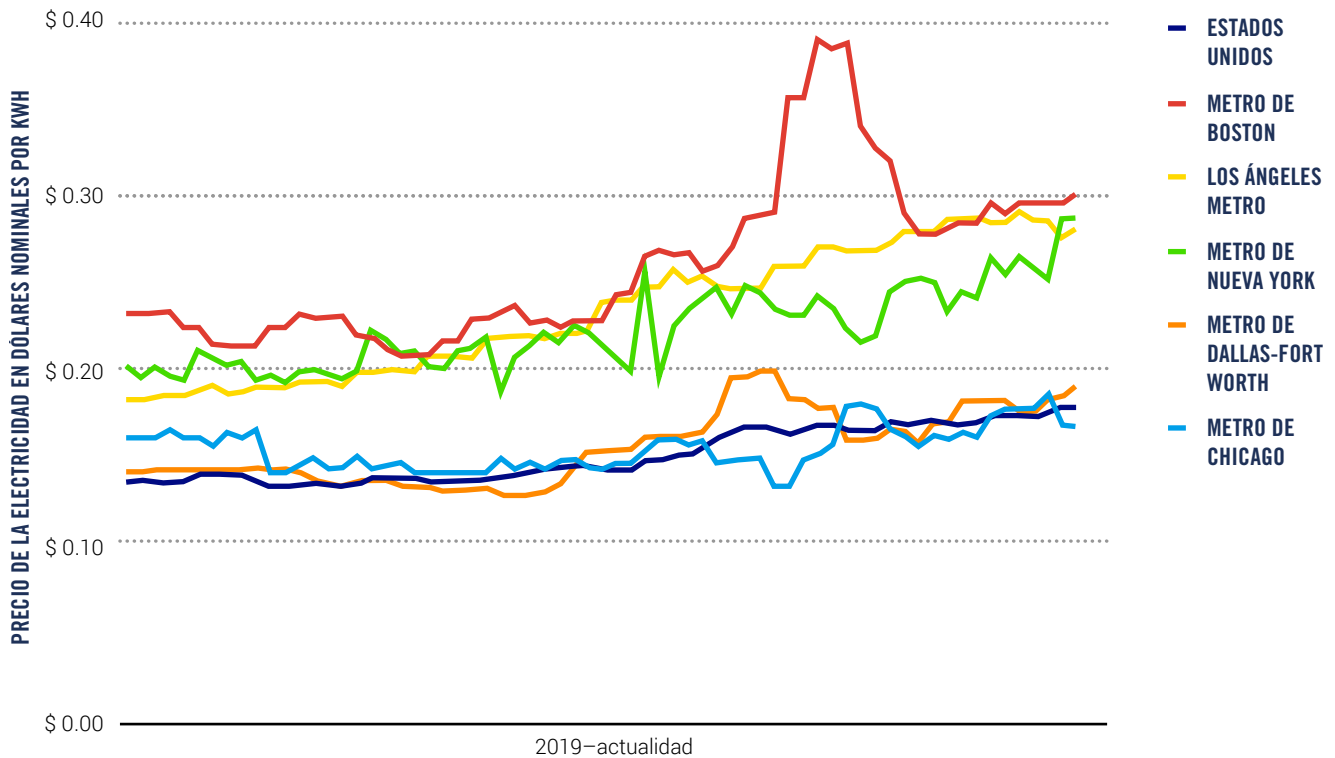


Fuente: Censo de Estados Unidos (vía tigris) y herramienta LEAD del Departamento de Energía (DOE)

La dependencia de Boston del gas natural licuado (GNL) importado provocó un fuerte aumento en los precios de la electricidad durante la escasez

energética en Europa causada por la invasión de Rusia a Ucrania.

FIGURA 8: EL PRECIO MINORISTA DE LA ELECTRICIDAD EN BOSTON EN CONTEXTO

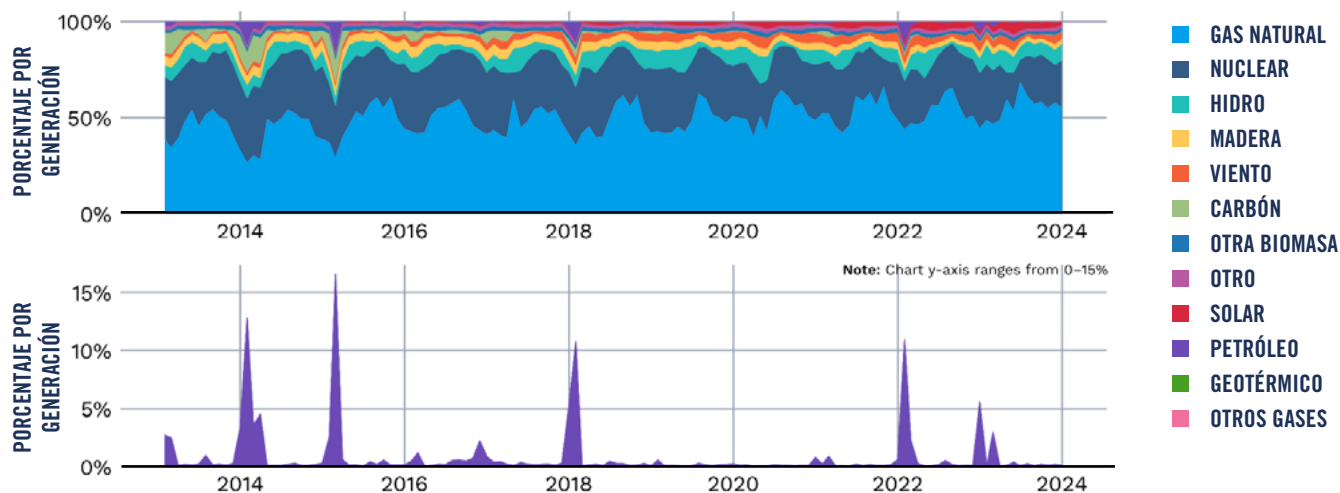


Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics)

(Obsérvese también el alto precio nominal de la electricidad en Los Ángeles en el estudio de caso anterior, a pesar de las diferencias con Boston en clima regional y acceso a infraestructura energética.) Debido a las limitaciones para importar electricidad desde Nueva York y Quebec —provocadas por dificultades en los procesos de permisos y la oposición local conocida como NIMBY (Not In My Back Yard)—, la red eléctrica de Nueva Inglaterra depende de plantas de respaldo alimentadas con diésel para mantener el suministro durante los días de mayor consumo invernal, así como de calderas domésticas que utilizan fuel-oil, un combustible altamente contaminante, para la calefacción residencial.

FIGURA 9: GENERACIÓN MENSUAL DE ELECTRICIDAD EN NUEVA INGLATERRA

SI BIEN NUEVA INGLATERRA DEPENDE CADA VEZ MÁS DE LA GENERACIÓN CON GAS NATURAL, SIGUE DEPENDIENDO DE MANERA CONSTANTE DE LA GENERACIÓN A PARTIR DE PETRÓLEO DURANTE LOS MESES DE INVIERNO.



Fuente: ARBO

Al comparar la generación eléctrica a partir de petróleo con la generación a partir de gas natural en Nueva Inglaterra, el PPI y Arbo concluyeron que la intensidad de emisiones de CO₂ de la electricidad generada con petróleo en la región es 1.8 veces mayor por MWh que la de la electricidad generada con gas natural. Asimismo, las emisiones de SOx (15 veces mayores) y de NOx (15 veces mayores) superan ampliamente a las que se producirían en un escenario alternativo de expansión de la capacidad de gasoductos de gas natural.¹⁶ En consecuencia, la matriz energética invernal de Boston no solo expone a los vecindarios afroamericanos y latinos de bajos ingresos a precios volátiles, sino también a una intensidad de carbono 78 % mayor en un sistema eléctrico que libera más contaminantes atmosféricos locales y genera mayores daños a la salud de los residentes urbanos cercanos.¹⁷ De este modo, los residentes de los suburbios más acomodados que rodean Boston pueden relegar a los vecindarios de bajos ingresos y de clase trabajadora a vivir en focos de contaminación y de altos costos energéticos, mientras se felicitan a sí mismos por “detener la expansión de los combustibles fósiles”.

En el vecindario de Chelsea, en Boston, los conflictos locales en torno a una subestación propuesta convirtieron el proyecto en un símbolo de la llamada “carga de infraestructura” de la comunidad.¹⁸ A pesar de que la subestación¹⁹ comenzó a recibir permisos desde 2014 con el objetivo de atender el crecimiento de la demanda eléctrica local, la oposición vecinal²⁰ impulsada por grupos de activismo ambiental como Extinction Rebellion, GreenRoot y la Conservation Law Foundation— denunció el proyecto como una imposición indebida sobre una comunidad definida por Massachusetts como de “justicia ambiental”, que, según estos grupos, ya soportaba una carga excesiva por albergar infraestructura energética.²¹

Algunas quejas, como la preocupación del público por la preparación ante inundaciones, pusieron de relieve cuestiones técnicas de seguridad que sí tenían solución. Sin embargo, los grupos ambientalistas también recurrieron a las tácticas habituales de dilación, alegando que las empresas de servicios públicos y las juntas encargadas de la localización del proyecto no incorporaron de manera

significativa la participación comunitaria, lo que dio lugar a una visión confusa y poco clara de lo que constituye la justicia.

¿Es realmente una “carga” una subestación que satisface las necesidades locales de confiabilidad del sistema eléctrico sin emitir gases de efecto invernadero ni contaminantes atmosféricos? Cualquier estrategia eficaz para garantizar un suministro energético confiable en Boston requerirá la incorporación de muchas más subestaciones, así como líneas de transmisión y distribución, sus transformadores y nueva generación de energía renovable. Las quejas sobre comunidades agobiadas que se ven obligadas constantemente a aceptar nueva infraestructura contaminante no pueden aplicarse a un proyecto orientado a mejorar la confiabilidad del sistema y diseñado para atender las necesidades de un vecindario históricamente desatendido. Una nueva subestación no constituye una injusticia ambiental; significa energía más barata y más confiable para los vecindarios circundantes. Para un vecindario ubicado en un estado de fuerte tradición demócrata, una nueva subestación es un proyecto que debería celebrarse por las nuevas capacidades que aportará a las comunidades a su alrededor.

REDEFINIR LA JUSTICIA AMBIENTAL

El movimiento por la justicia ambiental existe desde hace ya medio siglo. Surgió en los últimos años del movimiento por los derechos civiles, cuando comunidades de Warren County, Carolina del Norte, y del este de Los Ángeles comenzaron a identificar y a protestar los efectos nocivos de fuentes de contaminación —como los vertederos de desechos tóxicos— ubicadas de manera desproporcionada en sus comunidades. Académicos latinos, como Diana Hernandez, el antropólogo Devon Peña y la geógrafa Laura Pulido, han producido trabajos profundos y detallados sobre casos contemporáneos e

históricos de este tipo de injusticia ambiental. Lamentablemente, con la excepción de la literatura en salud pública, la mayoría de estas intervenciones académicas que documentan la injusticia ambiental están desconectadas **tanto de los responsables de la política energética como de las preocupaciones cotidianas del votante latino contemporáneo.** Las encuestas del PPI revelaron que el 69 % de los latinos prioriza el costo al momento de adquirir nuevas tecnologías energéticas para uso personal, y cualquier intento político de representarlos debe tomar en cuenta esta realidad.

Mientras que el movimiento ambiental original, aproximadamente entre 1970 y 2000, se enfrentó a gobiernos locales e industrias por decisiones de localización de proyectos, contaminación del aire y disposición de residuos peligrosos, la principal prioridad de los activistas ambientales actuales es el cambio climático. Este problema no puede resolverse cerrando una planta local de reciclaje de baterías de plomo ni una gran central eléctrica a carbón. En cambio, combatir el cambio climático requiere un despliegue masivo de recursos de generación de energía limpia, infraestructura eléctrica para transportarla y gestionarla, y la electrificación de nuevos usos en hogares y empresas. De hecho, la expansión de nueva capacidad de generación, infraestructura de red y la electrificación de los usos finales —mediante tecnologías eléctricas como los vehículos eléctricos y las bombas de calor para sustituir las emisiones del transporte, la calefacción de edificios y la manufactura— exige no solo una nueva perspectiva sobre la distribución de las “cargas” de la infraestructura local, sino también sobre los procesos de toma de decisiones para construir y albergar todos los nuevos proyectos que requiere una transición hacia la energía limpia. Si cada línea de transmisión, pozo geotérmico o instalación de almacenamiento con baterías se convierte en una lucha existencial por el “alma” de una comunidad, como lo plantean algunos

defensores de la justicia de izquierda radical, la asignación práctica de costos y beneficios entre productores, operadores y consumidores de energía termina paralizándose.

En lugar de oponerse a nuevas subestaciones o a los intentos por agilizar las regulaciones ambientales,²² los defensores de la justicia ambiental deberían reconocer que una estrategia eficaz de protección climática requerirá un despliegue mucho mayor de generación energética local, así como de la infraestructura de transmisión y distribución necesaria para gestionarla.²³ En contraste, los objetivos de muchos defensores actuales de la justicia ambiental parecen casi diseñados a propósito para obstaculizar el avance climático a gran escala. En una democracia, los activistas radicales harían bien en recordar que las prioridades del electorado en materia de costo de vida no pueden ignorarse en favor de cruzadas poco realistas para mantener los combustibles fósiles “bajo tierra” o prohibir la energía nuclear de cero emisiones de carbono.

Como señalan académicos como George Hoberg en *The Resistance Dilemma* y Kevin J. Elliot en *Democracy for Busy People*, empoderar a “la comunidad” para oponerse a proyectos suele beneficiar no a los supuestos destinatarios —las familias de clase trabajadora—, sino a los intereses de ciudadanos acomodados que tienen mayor probabilidad de contar con el tiempo necesario para asistir a audiencias de participación pública, presentar demandas complejas y promover sus propias preferencias privadas. Los miembros de las comunidades locales que están ocupados con el trabajo o el cuidado familiar son, a su vez, quienes menos probabilidades tienen de participar efectivamente en los procesos de “involucramiento de las partes interesadas”. Al vetar la construcción de nueva infraestructura energética, los activistas de la justicia ambiental prolongan de manera contraproducente la vida útil

de instalaciones antiguas y contaminantes —como las centrales eléctricas a carbón y diésel— y de infraestructura heredada que sí impone cargas reales de contaminación dañina para la salud de los residentes locales, al mismo tiempo que retrasan los proyectos necesarios para abandonar esas tecnologías y reducir los costos energéticos locales. Aun cuando las decisiones de funcionarios estatales en Nueva York y Nueva Inglaterra obligan a Boston a depender de plantas de respaldo a diésel más contaminantes durante el invierno, la oposición de autoridades estatales persiste bajo argumentos “ambientales”. Las preocupaciones en torno a la justicia ambiental tienen mayor sentido en el contexto de luchas históricas contra políticas gubernamentales que trazaron autopistas a través de comunidades de bajos ingresos o que no lograron cerrar plantas de baterías de plomo en estos vecindarios. Lo que no tiene sentido es bloquear la construcción de una nueva subestación eléctrica que otorgaría a los usuarios de la zona una mayor confiabilidad del sistema eléctrico.

En síntesis, el activismo por la justicia ambiental está atrapado en supuestos obsoletos sobre la tecnología y los mercados contemporáneos, las herramientas de política pública y los mensajes políticos, lo que ha dejado a sus supuestos beneficiarios —familias afroamericanas y latinas de clase trabajadora— con un conjunto confuso de mensajes y facturas de energía más altas.

En una encuesta realizada en noviembre de 2024 por el PPI y YouGov, una submuestra reducida de 86 latinos de clase trabajadora reveló que, al considerar sus propias compras de tecnologías energéticas, una sólida mayoría del 69 % afirmó basar sus decisiones en el costo, frente a solo un 17 % que prioriza principalmente la reducción de su huella de carbono.²⁴ Encuestas adicionales realizadas por Ruy Teixeira, del AEI, muestran un apoyo mayoritario entre los hispanos a un enfoque

de “todas las opciones sobre la mesa” frente a una eliminación rápida de los combustibles fósiles: un 63 % respalda una matriz energética amplia, frente a un 37 % que apoya su eliminación gradual,²⁵ y estos resultados confirman el hallazgo del PPI de que el costo es el principal criterio en las decisiones de compra personales.²⁶

En lugar de delegar sus políticas energéticas y climáticas a la izquierda ambientalista, los líderes políticos deberían mostrar un mayor respeto por las preferencias de la clase trabajadora a favor de un enfoque integral para la transición hacia la energía limpia. Esto implica utilizar combustibles heredados relativamente eficientes y adaptables, como el gas natural, para integrar mayores proporciones de energía renovable en las redes eléctricas. La mayoría de los expertos en energía considera que el gas natural seguirá desempeñando el papel de combustible de transición, aportando una estabilidad crucial a una red eléctrica en expansión, de la cual los usuarios demandarán cada vez más energía para usos electrificados como la calefacción, la refrigeración y el transporte. Una política de transición exitosa requerirá la aplicación adecuada de incentivos para tecnologías de energía limpia y el aprovechamiento de los activos del sistema energético existente, de modo que puedan integrarse mayores proporciones de energías renovables en una red que no solo reemplace los activos fósiles antiguos, sino que crezca más allá de ellos.

UN CAMINO MÁS INTELIGENTE HACIA ADELANTE: RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Reforma de permisos para acelerar el despliegue de energía limpia:

- **El Congreso y los gobiernos estatales deberían agilizar los procesos de aprobación** mediante plazos máximos de dos años (shot clocks) para proyectos de energía renovable, la expansión de la red eléctrica y la infraestructura de gasoductos, con el fin de

reducir costos y mejorar la confiabilidad del sistema.

- **Los estados deberían ampliar la infraestructura de gasoductos** y de la red eléctrica que permite gestionar y transportar la energía entre los generadores y los usuarios, para garantizar que los vecindarios de bajos ingresos y de clase trabajadora no se queden rezagados en la transición energética.

- Este cambio también asegurará que los latinos de clase trabajadora empleados en la manufactura, la construcción y las industrias extractivas cuenten con un flujo sólido de oportunidades laborales y con una dirección clara sobre cómo sus aportaciones pueden integrarse al esfuerzo colectivo de una transición energética de largo plazo.

Un enfoque equilibrado y tecnológicamente neutral:

- **Respaldar una matriz energética** amplia que incluya energía nuclear, energías renovables, baterías y gas natural con bajas emisiones de metano, para garantizar tanto la reducción de emisiones como la estabilidad de costos, en lugar de prohibiciones rígidas e impopulares a los combustibles fósiles.
- Especialmente en regiones con alta penetración de energías renovables, la tecnología actual de las redes eléctricas requiere las contribuciones de inercia y estabilidad que ofrecen las centrales de gas natural y nucleares con capacidad de ajuste rápido de carga. En lugar de intentar omitir el paso complejo de integrar las energías renovables y el almacenamiento en baterías dentro de los sistemas existentes, los responsables de las políticas públicas deberían reconocer la necesidad de redes

eléctricas modernas que proporcionen el control de voltaje y frecuencia indispensable para avanzar hacia un sistema eléctrico 100 % libre de emisiones.

- **Adoptar tecnologías energéticas avanzadas** en los ámbitos de la energía nuclear, la geotermia y el gas natural con bajas emisiones de metano junto con CCUS (captura, uso y almacenamiento de carbono), baterías y tecnologías avanzadas de red eléctrica —como inversores formadores de red y condensadores síncronos—, todas las cuales tienen un papel que desempeñar en el futuro de los sistemas eléctricos del país.

Asistencia energética focalizada para familias de bajos ingresos:

- **Ampliar y modernizar programas como el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y el Programa de Asistencia para la Climatización de Viviendas (WAP)** con el fin de atender mejor a los hogares que enfrentan altas cargas por costos de energía.
- El presidente Trump inicialmente se negó a liberar los fondos de verano del LIHEAP hasta que la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética (NEADA, por sus siglas en inglés) y el Congreso presionaron a la administración para que lo hiciera.
- Garantizar un lenguaje legal sólido y un financiamiento suficiente para el programa existente puede requerir un capital político considerable, pero reformar el programa para agilizar la distribución de fondos suficientes a través de Centros Comunitarios de Energía (descritos a continuación) debería mantenerse como un objetivo de política pública a largo plazo para el Partido Demócrata.

Creación de Centros Comunitarios de Energía:

- **Los gobiernos locales deberían establecer instituciones de atención directa a nivel comunitario** que proporcionen a consumidores y proveedores de servicios información confiable sobre eficiencia energética, opciones de energía para el hogar y programas de asistencia financiera, lo que permitiría crear un valioso mercado local de servicios y usuarios.
- En los vecindarios latinos, un recurso de este tipo podría ofrecer materiales informativos en español y garantizar que la interacción de la ciudadanía con el gobierno comience a partir de la asistencia y la provisión de información confiable sobre los programas pertinentes, en lugar de invitaciones a procedimientos formales de “participación de partes interesadas” con comentarios públicos sobre proyectos específicos y aislados. Garantizar la asignación de fondos suficientes a través de los Centros Comunitarios de Energía (descritos anteriormente) debería mantenerse como un objetivo de política pública a largo plazo para el Partido Demócrata.
- Brindar a contratistas y trabajadores un espacio donde puedan conocer nuevas tecnologías podría ayudar a aumentar las tasas de adopción de opciones innovadoras adecuadas a las necesidades de cada comunidad local, y asegurar una fuente confiable de información tanto para consumidores como para empresas.

Además, el PPI recomienda las siguientes políticas orientadas específicamente a problemas que afectan de manera desproporcionada a las comunidades latinas. Si bien estas políticas están diseñadas para atender dichas desigualdades, el PPI respalda su implementación por su aplicabilidad general, y no sobre bases identitarias estrechas.

- **Hacer que la modernización de la infraestructura energética sea más simple, rápida y económica:** Reducir el “impuesto al tiempo” que imponen los procesos regulatorios onerosos de aprobación para proyectos de energía limpia y mejoras de eficiencia energética beneficiaría a los latinos de clase trabajadora, cuyos tiempos son limitados. La política energética demócrata debe tener en cuenta las prioridades de la clase trabajadora en relación con el costo de vida, sin dar la impresión de exigir reclamos maximalistas sobre el tiempo de los trabajadores, a fin de ganar elecciones, avanzar en la agenda climática y ofrecer vías reales de crecimiento económico.

- **Impulsar la construcción de vecindarios asequibles y mejorar la calidad de vida:**

Muchos hogares latinos en comunidades urbanas, suburbanas y rurales de todo el país tienen dificultades para acceder a viviendas adecuadas y se ven obligados a conformarse con opciones habitacionales más antiguas y de menor calidad, ubicadas en vecindarios contaminados y con servicios eléctricos y acceso a agua potable insuficientes.

- Facilitar la instalación de amenidades **beneficial comunitarias beneficiosas** como árboles en las calles, sistemas eficaces de sombra solar, redes de distribución eléctrica reforzadas y espacios para diversos modos de transporte— mejoraría la calidad de vida de las familias hispanas que actualmente están expuestas a cargas desproporcionadas de contaminación y a fenómenos climáticos extremos, mientras viven en viviendas inaccesibles o hacinadas.

- **Mejorar la calidad y la seguridad laboral para quienes trabajan en interiores y al aire libre.** Muchos latinos de clase trabajadora se desempeñan en empleos al aire libre y en

ocupaciones relacionadas con tecnologías energéticas, como la construcción, la agricultura y la logística de reparto.

- Dado que el oeste de Estados Unidos ya está experimentando los impactos del cambio climático, otorgar a los bomberos los permisos y recursos necesarios para implementar medidas proactivas de prevención de incendios **como las contempladas**, *l*, en la Fix Our Forests Act— reduciría los impactos en la salud y el clima tanto para los trabajadores al aire libre como para las ciudades cercanas.
- Asimismo, proporcionar lineamientos de la OSHA e incentivos para la adopción de tecnologías como ropa con sistemas de autoenfriamiento **para proteger contra la exposición al calor extremo** ayudaría a enfrentar los desafíos de adaptación climática, como el riesgo de golpes de calor entre los trabajadores expuestos a temperaturas extremas, y abordaría problemas directamente relacionados con su vida cotidiana.

CONCLUSIÓN

La justicia ambiental solo podrá consolidarse como movimiento si logra formular recomendaciones de política pública y movilizar a los votantes atendiendo sus preocupaciones más urgentes, en lugar de intentar definir intereses estrechos que no representen a la mayoría del electorado. Para la mitad de los hogares latinos que enfrentan inseguridad energética, los responsables de las políticas públicas y los defensores de estas causas deben reconocer la importancia fundamental de contar con energía asequible y confiable.

A medida que Donald Trump y el Partido Republicano han comenzado a gobernar, ha surgido una brecha entre su discurso de campaña

centrado en el costo de vida y un estilo de gobierno impredecible. El presidente Trump ha creado una oportunidad para una política energética y climática más inteligente al abandonar los enfoques de “todas las opciones sobre la mesa” y exigir políticas centradas exclusivamente en los combustibles fósiles. Este cambio no solo aparta a Estados Unidos del esfuerzo global por frenar el cambio climático, sino que también contradice la opinión pública, que muestra una amplia aceptación de la energía limpia. Además, coloca a Estados Unidos en desventaja frente a China en la carrera por dominar tecnologías de energía limpia como los paneles solares y las baterías para vehículos eléctricos. Entre los aranceles unilaterales que elevan el costo de los bienes de consumo, el abandono del enfoque integral acompañado de un ataque sin precedentes a la energía eólica, y la incertidumbre en la inversión derivada de un proceso de formulación de políticas ejecutivas impredecible, la administración Trump corre el riesgo de disparar los costos para los consumidores y dejar a los sistemas energéticos del país mal preparados para los desafíos de la próxima década. Con un enfoque más inteligente y coherente en materia de política energética, los responsables de la toma de decisiones podrían ayudar a que las comunidades latinas crezcan y prosperen.

SOBRE EL AUTOR

Elan Sykes es el Director de Política Energética y Climática del PPI. Su trabajo se centra en el despliegue de energía, la innovación y la descarbonización.

References

- 1 "Hispanic Heritage Month: 2024," United States Census Bureau, Agosto 15, 2024, <https://www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2024/hispanic-heritage-month.html>; <https://catalist.us/whathappened2024/>.
- 2 "Table HC11.1 Household Energy Insecurity, 2020," U.S. Energy Information Administration, Agosto 15, <https://www.eia.gov/consumption/residential/data/2020/hc/pdf/HC%2011.1.pdf>.
- 3 "2020 RECS Survey Data," Residential Energy Consumption Survey (RECS), U.S. Energy Information Administration, consultado en Enero 2026, <https://www.eia.gov/consumption/residential/data/2020/>.
- 4 Diana Hernández, "Understanding 'energy insecurity' and why it matters to health," *Social Science and Medicine*, Octubre 2016, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953616304658?via%3Dihub#sec3>.
- 5 Dan Hamilton et al., "2025 U.S. Latino GDP Report," California Lutheran University and UCLA Health (Center for the Study of Latino Health and Culture), 2025, https://blogs.callutheran.edu/cerf/files/2025/09/2025_USLatinoGDP_FINALrev.pdf.
- 6 Hamilton et al., "2025 Latino GDP Report."
- 7 Dominic J. Bednar, Tony Gerard Reames, and Gregory A. Keoleian, "The Intersection of Energy and Justice: Modeling the Spatial, Racial/ Ethnic and Socioeconomic Patterns of Urban Residential Heating Consumption and Efficiency in Detroit, Michigan," *Energy and Buildings*, Volume 143, May 15, 2017, Pages 25-34, ISSN 0378-7788, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.03.028>.
- 8 Benjamin Goldstein, Tony G. Reames, and Joshua P. Newell, "Racial Inequity in Household Energy Efficiency and Carbon Emissions in the United States: An Emissions Paradox," *Energy Research & Social Science*, Volume 84, Febrero 2022, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102365>.
- 9 Marilyn Brown et al., "Low-Income Energy Affordability: Conclusions From A Literature Review," Oak Ridge National Laboratory, March 2020, <https://doi.org/10.2172/1607178>.
- 10 Boris R. Lukanov and Elena M. Krieger, "Distributed Solar and Environmental Justice: Exploring the Demographic and Socio-Economic Trends of Residential PV Adoption in California," *Energy Policy*, Volume 134, Noviembre 2019, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110935>.
- 11 Deborah A. Sunter, Sergio Castellanos, and Daniel M. Kammen, "Disparities in Rooftop Photovoltaics Deployment in the United States by Race and Ethnicity," *Nature Sustainability*, Enero 10, 2019, <https://www.nature.com/articles/s41893-018-0204-z>.
- 12 Chih-Wei Hsu and Kevin Fingerman, "Public Electric Vehicle Charger Access Disparities Across Race and Income in California," *Transport Policy*, Enero 2021, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X20309021?via%3Dihub>.
- 13 Hsu and Fingerman, "Public Electric Vehicle Charger."
- 14 Erich Muehlegger and David Rapson, "Understanding the Distributional Impacts of Vehicle Policy: Who Buys New and Used Alternative Vehicles?" *National Center for Sustainable Transportation*, Febrero 2018, https://escholarship.org/content/qt0tn4m2tx/qt0tn4m2tx_noSplash_36244609f162444f3e55c550dfc22cad.pdf.

- 15 David James Henry, "La Sombrita Passengers," *Wikipedia Images*, Julio 18, 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/La_Sombrita#/media/File:La_Sombrita_passengers.jpg
- 16 Arbo analysis of eGrid data for PPI.
- 17 Arbo analysis of eGrid data for PPI.
- 18 Miriam Wasser, "Battle over controversial East Boston substation officially ends with court decision," *WBUR*, Septiembre 12, 2024, <https://www.wbur.org/news/2024/09/12/battle-over-controversial-east-boston-substation-officially-ends-with-court-decision>.
- 19 "New East Eagle Substation — Update," Eversource Energy Planning Advisory Committee Meeting, Marzo 16, 2023, https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/2023/03/a02_2023_03_16_pac_es_new_east_eagle_station_update.pdf.
- 20 Miriam Wasser, "Some East Boston Residents Are Wary Of Proposed Electrical Substation," *WBUR*, Agosto 22, 2019, <https://www.wbur.org/news/2019/08/22/eversource-east-boston-substation-eagle-hill>.
- 21 "Mystic - East Eagle - Chelsea Reliability Project," Eversource Energy, <https://www.eversource.com/content/residential/about/transmission-distribution/projects/massachusetts-projects/mystic---east-eagle---chelsea-reliability-project>.
- 22 Hayley Smith, "Environmental Groups are Outraged After Newsom Overhauls CEQA," *Los Angeles Times*, Julio 1, 2025, <https://www.latimes.com/environment/story/2025-07-01/environmental-groups-outraged-by-newsom-overhaul-ceqa>.
- 23 "Letter Opposing Energy Permitting Reform Act of 2024," Earthjustice, Julio 30, 2024, <https://earthjustice.org/wp-content/uploads/2024/07/7.30-letter-opposing-energy-permitting-reform-act-of-2024.pdf>.
- 24 Will Marshall, Deborah Mattinson, and Claire Ainsley, "PPI 2024 Election Review And the Way Ahead for Democrats," YouGov, Progressive Policy Institute, Diciembre 10, 2024, <https://www.progressivepolicy.org/ppi-2024-election-review-and-the-way-ahead-for-democrats/>.
- 25 Ruy Teixeira, "Hispanic Moderates' Big Swing Right," *The Liberal Patriot*, May 29, 2025, <https://www.liberalpatriot.com/p/hispanic-moderates-big-swing-right>.
- 26 "Ruy Teixeira Climate Survey septiembre 2024 Crosstabs," YouGov, 53 and 120, https://www.aei.org/wp-content/uploads/2025/07/rt_climate_2024_sept_crosstabs.pdf?x85095&x85095.



The Progressive Policy Institute is a catalyst for policy innovation and political reform based in Washington, D.C. Its mission is to create radically pragmatic ideas for moving America beyond ideological and partisan deadlock.

Founded in 1989, PPI started as the intellectual home of the New Democrats and earned a reputation as President Bill Clinton's "idea mill." Many of its mold-breaking ideas have been translated into public policy and law and have influenced international efforts to modernize progressive politics.

Today, PPI is developing fresh proposals for stimulating U.S. economic innovation and growth; equipping all Americans with the skills and assets that social mobility in the knowledge economy requires; modernizing an overly bureaucratic and centralized public sector; and defending liberal democracy in a dangerous world.

© 2026
PROGRESSIVE POLICY INSTITUTE
ALL RIGHTS RESERVED.

PROGRESSIVE POLICY INSTITUTE
1919 M Street NW,
Suite 300,
Washington, DC 20036

Tel 202.525.3926
Fax 202.525.3941

info@ppionline.org
progressivepolicy.org
